WOLFGANG STREECK

MERCADOS Y PUEBLOS

Capitalismo democrático e integración europea

Las esperanzas de que las resoluciones de los jefes de Estado y de Gobierno europeos estabilizaran los mercados financieros y resolvieran la crisis de la deuda de la Eurozona de una vez para siempre han ido aumentando con cada nueva cumbre durante los dos últimos años, para desvanecerse de nuevo una vez que se hacía pública la letra pequeña. ¿Se avendrían realmente los inversores al «recorte voluntario»? ¿No era el bazuca, después de todo, nada más que una pistola de agua? Nadie podría decir con certidumbre qué se debe hacer para reparar el cuarteado sistema financiero global. Unos piden austeridad estricta, otros, estímulo al crecimiento; todos saben que ambos son necesarios, pero que no se pueden tener al mismo tiempo. Los paquetes de rescate de los tecnócratas fluctúan en las horquillas que abren los nuevos dilemas; se ofrecen por docenas ingeniosas recetas patentadas, pero su periodo de validez es cada vez más corto. Si, a pesar del veto británico, los dirigentes europeos pudieron dormir sin pesadillas después del acuerdo alcanzado en la cumbre de diciembre de 2011 sobre un tratado para veintiséis países, y de los créditos a largo plazo del Banco Central Europeo de medio billón de euros a los bancos al 1 por 100, poco después todo volvía a estar de nuevo como antes. Sólo están seguros de que los «mercados» se calmarán… cuando se calmen; pero nadie insinúa siquiera cuándo sucederá eso o qué es lo que pedirán a continuación. ¿Arremeterán contra Francia? Si les conviene, por supuesto. Sólo se sentirán satisfechos una vez que se les garantice que se les devolverá su dinero mediante paquetes de austeridad nacionales, acuerdos internacionales de protección de los depósitos, o idealmente unos y otros.

Hace pocos meses argumenté en estas páginas que el «capitalismo democrático» de posguerra albergaba una contradicción fundamental entre los intereses de los mercados de capital y los de los votantes; una tensión que se había visto sucesivamente desplazada mediante un proceso insostenible de «pedir prestado al futuro» década tras década: desde la inflación de la década de 1970, pasando por la deuda pública en la de 1980 y la deuda privada en la de 1990 y principios de la siguiente, hasta la explosión final en la crisis financiera de 2008[1]. Desde entonces la dialéctica entre democracia y capita-

[1] W. Streeck, «The Crises of Democratic Capitalism», *NLR* 71 (sept.-oct. de 2011) [ed cast.: «Las crisis del capitalismo democrático», *NLR* 71 (nov.-dic. 2011), pp. 5-26]. El texto actual se es-

lismo se ha venido desplegando a una velocidad vertiginosa. Hace pocos meses las bromas en los pasillos de Bruselas sobre lo bien que podría venir un golpe militar en Grecia tras la sugerencia de Papandreu de realizar un referendo fueron seguidas por la sustitución, entre suspiros colectivos de alivio, primero del gobierno griego y a continuación del italiano por equipos de economistas tecnócratas de gran consideración, de los que ahora se espera que pongan en vigor, por fin, la lógica de «los mercados», y esa confianza no es del todo injustificada. Mario Monti, el nuevo primer ministro italiano, fue el comisario para la Competencia de la Unión Europea que impuso la división del sistema bancario estatal alemán (tras lo cual intentó un ejercicio infructuoso de reestructuración mediante la compra de bonos-basura estadounidenses). Cuando dejó de formar parte de la Comisión Europea en 2004, siguió ganándose la vida como asesor, entre otros, de Goldman Sachs, el mayor productor de bonos-basura del mundo*. En cuanto a Lukas Papademos, ahora primer ministro de Grecia, era presidente del Banco Central griego cuando el país se aseguró, mediante estadísticas falsificadas, su acceso a la unión monetaria y, con él, a un crédito ilimitado con tipos de interés alemanes. En la elaboración de la contabilidad creativa del balance nacional griego fue de mucha ayuda la división europea de Goldman Sachs, presidida poco después por Mario Draghi, ahora presidente del Banco Central Europeo. Seguramente los tres se entenderán bien entre sí.

Desequilibrios continentales

Así ha quedado finalmente muy claro que los estados democráticos del mundo capitalista no tienen un soberano, sino dos: abajo, el pueblo, y por encima los «mercados» internacionales. La globalización, la financiarización y la integración europea han debilitado al primero y han reforzado al segundo. El equilibrio de poder se está desplazando rápidamente hacia arriba. Antes se requerían dirigentes que entendieran y hablaran la lengua del pueblo; ahora es la lengua del dinero la que tienen que dominar. Los que «susurraban al pueblo» se han visto sustituidos por quienes entienden los «susurros del capital», de los que se espera que conozcan los trucos secretos necesarios para asegurar que los inversores sean retribuidos con el debido interés compuesto. Dado que la confianza de los inversores es más importante ahora que la de los votantes, tanto la izquierda como la derecha ven la toma del poder por los confidentes del capital no como un problema, sino como la solución. En la Europa septentrional, los exóticos informes anecdóticos sobre el clientelismo endémico en Grecia e Italia facilitan la reiteración de banalidades que insisten en que la democracia no puede conllevar el dere-

---

cribió como epílogo a la traducción alemana de ese ensayo; ahora se publica, puesto al día, por gentileza de *Lettre Internationale*. Véase «Völker und Märkte: Demokratischer Kapitalismus und Europäische Integration. Ein Epilog», *LI,* invierno de 2011.

* Otras ocupaciones interesantes suyas son la presidencia del sector europeo de la Comisión Trilateral y la participación en los encuentros anuales del Grupo de Bilderberg *[N. del T.].*

cho a vivir por encima de los propios medios o a no pagar las deudas, tanto más cuando se trata de «nuestro» dinero.

Pero las cosas no son tan simples. No es «nuestro» dinero sino el de los bancos el que está en cuestión, y no es la solidaridad con los griegos sino con «los mercados». Como sabemos, estos últimos han vertido prácticamente su dinero sobre los primeros, en espera de una jugosa retribución a cargo, si no de ellos, de otros estados de la Eurozona, si fuera necesario mediante el chantaje de los «demasiado grandes para dejarlos caer» de 2008. Los gobiernos no han contradicho esas expectativas, aunque los gigantescos aparatos de supervisión de los grandes estados-nación y las organizaciones internacionales no pueden haber dejado de apreciar que países como Grecia se habían empapado de crédito barato tras su acceso a la Eurozona. De hecho, parece retrospectivamente que ese resultado –el apuntalamiento de la oferta de dinero de los estados del sur con créditos privados como sustituto de las subvenciones cada vez más escasas de los exhaustos fondos regionales y estructurales de la UE, en una era de consolidación presupuestaria mundial– era una de las principales razones para permitir que los recién llegados del Mediterráneo al capitalismo democrático se integraran en la Unión Monetaria Europea. De esa forma no sólo los bancos hacían negocios rentables aparentemente seguros, sino que las industrias exportadoras de los países del norte podían aprovechar la capacidad de compra continuamente renovada de sus clientes del sur, sin temor a que países como Portugal, España, Italia y Grecia se protegieran frente a la mayor productividad de las economías del norte mediante devaluaciones periódicas de sus monedas.

El fingido asombro de las elites políticas del norte ante el uso por sus vecinos del Mediterráneo de los créditos y subvenciones para alimentar la especulación y la corrupción –en lugar del «honesto» crecimiento anglosajón– es probablemente una de las proezas más descaradas de la historia política de las relaciones públicas. Cualquiera medianamente informado conocía la inverosimilitud de las colosales cosechas olivareras griegas, subvencionadas dos veces por la UE (primero para su producción y, a continuación, para su transformación igualmente virtual en aceite industrial), del mismo modo que las íntimas conexiones de posguerra entre la democracia cristiana y la mafia –con una figura como Giulio Andreotti actuando como médula espinal de una poderosa red que conectaba el aparato estatal, los partidos políticos, las fuerzas armadas, el crimen organizado y los servicios de inteligencia– no eran sino un secreto de Estado. En cuanto a Grecia, los políticos europeos eran muy conscientes de las enormes facturas históricas que se habían ido acumulando desde el final de la dictadura militar: una distribución de riqueza que recuerda la de Latinoamérica; una clase alta prácticamente exenta de impuestos; y un Estado democrático al que no le quedaba otra posibilidad que endeudarse pidiendo prestados a «los mercados» de otros estados los recursos que sus ciudadanos ricos habían ido enviando al extranjero, de forma que el «viejo dinero» pudiera seguir siéndolo tranquilamente, mientras se empleaba el nuevo para comprar el

apoyo de una creciente clase media con hábitos de consumo cada vez más influidos por los gustos del norte.

Que nadie levantara la voz en su momento pudo deberse al hecho de que la única alternativa, tras el final de la dictadura militar en 1974, habría sido una remodelación radical de la sociedad griega, quizá siguiendo la línea de la Emilia-Romaña, entonces con un gobierno regional eurocomunista. Sin embargo, nadie en el norte de Europa ni en Estados Unidos estaba dispuesto a aceptarlo, lo mismo que en Portugal tras la Revolución de los Claveles, en España después de Franco y, por último y sobre todo, en la Italia de la década de 1970, donde el Partido Comunista de Enrico Berlinguer se abstenía de participar en el gobierno para no provocar un golpe militar como el de Chile. Y, así, la UE admitía cualquier cosa que se pareciera a una democracia posfascista, con la esperanza de que el crecimiento económico fuera eliminando la arcaica estructura social y de clase, responsable tanto de las dictaduras militares como del estancamiento de la modernización capitalista.

¿Convergencia al estilo italiano?

En lo que respecta a la Unión Europea, hoy dividida entre el norte y el sur, puede que nos veamos pronto ante otra ronda de integración. Esto puede parecer asombroso, dado el deterioro comúnmente diagnosticado de la «conciencia europea»; pero el nuevo impulso operará una vez más mediante el probado modelo neofuncionalista, sin la participación del pueblo y posiblemente incluso contra su voluntad. La integración neofuncionalista se basa en un «desborde» de campos ya integrados a otras áreas funcionalmente asociadas, desencadenado por conexiones causales que se presentan políticamente como constricciones de hecho *(Sachzwänge)* que sólo requieren la ratificación. Así es como preveía Jean Monnet el proceso de integración europea y como lo interiorizó toda una generación de politólogos. En la década de 1990, no obstante, ese mecanismo parecía exhausto. A medida que la integración avanzaba hacia áreas fundamentales de los estados-nación y su orden social, se iba «politizando» y se le puso freno. Se hicieron más difíciles nuevos pasos hacia la integración, que sólo se podían conseguir, como mucho, mediante el Tribunal Europeo de Justicia. Un fantasma aterrorizaba a la Europa de Bruselas: ¿Tendría que depender de allí en adelante el desempoderamiento de los estados-nación de la «conciencia europea» de sus pueblos, o incluso de la movilización de una conciencia *democrática* europea?

La crisis de la Eurozona ha resuelto esta cuestión una vez más apartando el proceso de integración de la voluntad del pueblo. La unión monetaria, concebida inicialmente como un ejercicio tecnocrático –que excluía por tanto las cuestiones fundamentales de la soberanía nacional y la democracia que la unión política supondría– está transformando rápidamente la UE en una entidad federal, en la que la soberanía y, por tanto, la demo-

cracia de los estados-nación, sobre todo de los ribereños del Mediterráneo, sólo existe sobre el papel. La integración «se desborda» ahora de la política monetaria a la fiscal. La *Sachzwänge* impuesta por los mercados internacionales –el empoderamiento de hecho, históricamente sin precedentes, de las necesidades de beneficio y seguridad de los propietarios de activos financieros– está forjando una integración que nunca se ha autorizado por medios político-democráticos y que, probablemente, se desea menos que nunca. Las formas legales mediante las que esto tiene lugar son secundarias: suceda lo que suceda, el Banco Central Europeo comprará cantidades ingentes de bonos que los inversores privados ya no quieren; y Fráncfort, Bruselas, Berlín y quizá también París, «tomarán medidas drásticas» (Angela Merkel) sobre las propiedades de los países deudores durante décadas, con o sin cambios en el Tratado. A diferencia de la farsa sobre el «Tratado Constitucional» de 2005, esta vez no habrá referendo en ningún país. El norte pagará al sur de forma que el sur pueda pagar a los bancos y no tenga que hacerlo el norte. El poder de las instituciones europeas, invulnerables frente a la presión democrática, especialmente el BCE, está alcanzando niveles antes inimaginables, respaldados y apuntalados por un directorio de dos estados-nación hegemónicos, que hace tiempo que se habría convertido en un directorio de sólo uno si el nuevo poder supremo no estuviera obligado, por razones históricas, a enmascarar tanto como sea posible la verdad de los hechos.

Cierto es que la «unión cada vez más estrecha» que esto implica no será precisamente un idilio; tendrá que celebrarse al estilo de una boda a punta de pistola empuñada por la autoridad paterna y forzada por un embarazo no planificado, lo que no suele ser una buena receta para la felicidad. La «unión de transferencias» que emerge actualmente puede compararse en todo caso con la unificación de Italia, cuyas ricas regiones septentrionales han subvencionado al Mezzogiorno atrasado durante todo el periodo de posguerra sin grandes resultados. Lo que comenzó como una forma de completar la unidad nacional se convirtió pronto en un sistema de corrupción institucionalizada. Las ayudas gestionadas por la *Cassa del Mezzogiorno* no iban nunca a parar a empresarios locales dinámicos –que apenas existían y que, en cualquier caso, carecían de espacio para respirar– sino a las muy atrincheradas clases altas posfeudales que, a su vez, entregaban a la Democracia Cristiana los votos de la población rural que controlaban; de ahí que el gobierno nacional se abstuviera de cualquier intento de perturbar su dominio. Y así, fieles al lema de Lampedusa en *Il Gattopardo,* las cosas podían seguir indefinidamente como estaban.

El nacionalismo –y los fondos regionales europeos– han contribuido a hacer soportable la carga del Mezzogiorno para el Estado italiano, y de ese modo a mantenerlo unido. Pero desde la década de 1990, con el desarrollo capitalista del sur todavía lejano y teniendo que compartir el dinero de Bruselas con la Europa oriental, una fracción creciente del electorado de la Italia del norte se ha mostrado cada vez más secesionista. Durante un tiempo, como en Grecia, el crédito barato inmediatamente disponible tras la entrada en la

unión monetaria ayudó al gobierno central a sedar al Mezzogiorno sin tener que elevar los impuestos en el norte. Pero esos préstamos ya no están disponibles. Nadie espera hoy un gran crecimiento económico en el sur de Italia, ya sea por propia iniciativa o gracias a algún remedio mágico de la UE. El malestar bajo Berlusconi no se debía únicamente a su peculiar uso de su tiempo privado, sino también al hecho de que nadie podía responder a la pregunta de cómo salvaguardaría Italia su unidad nacional frente a las crecientes desigualdades entre el norte rico y un sur estancado, que parecen insuperables sin una gran conmoción social.

Si Lombardía no ha conseguido generar la modernización capitalista del Mezzogiorno durante medio siglo, ¿qué esperanza hay de que las transferencias desde el norte de Europa al Mediterráneo sean nunca algo más que una cuota pagada por los contribuyentes del norte por la mayor productividad de las empresas de sus países? Los griegos y fineses no tienen una memoria común de una revolución nacional compartida; tampoco existe ninguna perspectiva de que un tercero ofrezca subvenciones para el desarrollo regional. ¿Por qué deberían entonces ser más pacientes los europeos del norte con los del sur que los italianos del norte con los del sur? Existe un paralelismo ominoso, sobre el que se suele pasar por encima, en la introducción del euro, que tanto en Europa como en Italia ha bloqueado la posibilidad de devaluación para las regiones económicamente débiles del sur. El resultado podría ser el mismo: retraso permanente, dependencia insuperable de los pagos de transferencia, y creciente desilusión tanto entre los receptores como entre los paganos de la ayuda económica.

El permiso de la Europa del norte a Grecia para permanecer en la unión monetaria es algo así como un caballo de Troya, sólo que esta vez no son los griegos los que ofrecen el regalo envenenado, sino quienes lo reciben. El Estado griego y parte de la burguesía parecen creer todavía que más vale pájaro en mano –en forma de subsidios europeos ocasionales– que ciento volando: desarrollo económico y social autodeterminado tras un regreso a la moneda nacional. El nexo de intereses en cuestión es extremadamente complejo y no se puede desarrollar aquí en detalle; pero vale la pena señalar que el sindicato alemán IG Metall justifica rotundamente su apoyo a la «solidaridad internacional» con Grecia en términos de asegurar a largo plazo las exportaciones alemanas al Mediterráneo[2]. Dado que la «solidaridad» no

[2] Véase IG Metall, *10 Gründe für den Euro und die Währungsunion* (10 razones para el euro y la unión monetaria), 19 de agosto de 2011: «La economía alemana vive, como ninguna otra economía nacional, de las exportaciones. Nuestros clientes en el extranjero suponen millones de empleos en Alemania. Los más importantes compradores de productos alemanes son los europeos […] la moneda única ha contribuido enormemente a la competitividad de los productos alemanes. Si los países deudores son arrojados fuera de la moneda común, devaluarán sus monedas para incrementar su competitividad. El euro, que entonces será la moneda común sólo para los países económicamente más fuertes de la Unión Europea, se verá sometido a una enorme presión para revaluarse. Un regreso al marco alemán significaría una revaluación de no menos del 40 por 100 […] los eurobonos, fondos de rescate y otros

puede ser una «vía de sentido único», no obstante, la política fiscal y social de Grecia tendrá que ser sometida a una supervisión, y no sólo para hacer más aceptable a la opinión pública en general el precio que el norte –que también sufre las consecuencias de la intensificación de la política de austeridad– tiene que pagar por la cohesión de la Unión. La unión monetaria se «desborda» así en forma de unión política, a expensas de la democracia en el sur –donde el poder de los parlamentos para elaborar y aprobar el presupuesto se transfiere al aparato supervisor de la UE y el FMI– y también en el norte, donde el pueblo y sus representantes parlamentarios pueden conocer casi cada día por los periódicos el nuevo fondo de rescate decidido de esa forma la noche anterior.

Entretanto, los gobiernos y la opinión pública del norte de Europa imponen a los países deudores su utopía autojustificativa de una vida conforme al mercado, pese a que ellos mismos han interiorizado la adicción a lo que Ralf Dahrendorf llamaba *Pumpkapitalismus* –capitalismo al fiado– basado en el dinero barato proporcionado por los mercados financieros enloquecidos. Podría ser más productivo preguntar cómo se podría o debería reescribir el contrato social del capitalismo democrático, a fin de prescindir del hábito cada vez más peligroso de pacificar los conflictos mediante pagos adelantados. ¿Cómo deberíamos imaginar un capitalismo que no dependa, para mantener la cohesión social, de un sistema de crédito hipertrofiado que promete subvencionar niveles de consumo ilimitados que todo el mundo sabe ya que no son generalizables? Un sistema de crédito, además, cuyas promesas parecen cada vez más difíciles de cumplir y en las que creen cada vez menos acreedores. Esas preguntas han sido planteadas, en formas diversas, por conservadores como Meinhard Miegel o progresistas como Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi. Pero sabemos –o deberíamos saber– que una interrupción del consumo de masas autodestructivo que tiene atenazado actualmente al mundo sólo será posible si se pueden obtener mayores sacrificios de los que más se han aprovechado de las recientes transformaciones de la economía capitalista, a diferencia de los que han visto declinar sus oportunidades de vida durante décadas de liberalización y globalización.

Un alejamiento democrático de la sedación emponzoñada proporcionada por el capitalismo del dinero fácil y barato requeriría nuevas soluciones a los problemas que este último no ha hecho más que empeorar. El crédito al consumo como compensación por el estancamiento de los salarios, y una creciente distancia entre los de más arriba y los de más abajo, podrían llegar a ser superfluos si todos ganaran un salario decente. Mejores condiciones de vida y de trabajo para la gran mayoría aliviarían la necesidad de más cachivaches de consumo para compensar la ansiedad por el status, la presión competitiva y la creciente inseguridad. Esto no será posible sin un

---

apoyos para los países deficitarios deberían estar vinculados a condiciones destinadas a reducir la deuda […] el déficit y superávit de los países individuales deberían ser controlados por un Fondo de la Moneda Europea. Un déficit o un superávit excesivos deberían dar lugar a procedimientos para la corrección de los desequilibrios.»

movimiento sindical revitalizado que ayude a poner fin a la explotación, cada vez más destructiva, de la capacidad humana de trabajar y de alimentar a la familia. Al mismo tiempo, la financiación del gasto público mediante la deuda tendría que ser sustituida por impuestos más eficaces sobre los ingresos y el patrimonio de los vencedores en la liberalización. Los estados no deberían tener que realizar las tareas encomendadas por sus ciudadanos en beneficio de toda la sociedad con dinero prestado, que tiene que ser devuelto con intereses a los prestamistas, quienes a su vez legan a sus hijos lo que van convirtiendo en riqueza. Sólo invirtiendo la tendencia hacia una división social cada vez más profunda –característica del capitalismo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI– sería concebible que la sociedad moderna pudiera liberarse de la compulsión de asegurar la paz social mediante la producción no controlada de activos tóxicos con el fin de estimular un crecimiento artificial.

El tema no es nada nuevo. Lo que debería preocuparnos no es que pudiera ocurrir –o que volviera a ocurrir– de repente, sino que su solución democrática parezca tan imposible hoy que evitamos incluso nombrarla, para no parecer pasados de moda. En su obra seminal sobre la división del trabajo, Émile Durkheim escribió: «Del mismo modo que los pueblos antiguos necesitaban como guía, ante todo, una fe común, nosotros tenemos necesidad de justicia»[3]. Desde que concluyó la era de la posguerra ha pasado mucha agua bajo los puentes, en particular la que el río Hudson lleva más allá del extremo sur de Manhattan, desde donde se gobierna el mundo estos días. Los sindicatos están desapareciendo, el capital sólo escucha a los presidentes de los bancos centrales y no a los partidos políticos; y el dinero de los ricos está en todas partes y en ninguna, desaparecido instantáneamente cuando los recaudadores de impuestos de estados insolventes van por él. Sólo nos cabe preguntarnos con qué tipo de opio del pueblo aparecerán los especuladores del capitalismo tardío una vez que la droga del crédito de la era de la globalización deje de funcionar y haya que establecer una dictadura estable de la «gente de dinero». ¿O podemos esperar que se les hayan agotado las ideas?

[3] Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society* [1893], Houndmills 1984, p. 322 [ed. cast.: *La división del trabajo social,* trad. de Carlos G. Posada, Madrid, Akal, [4]2002].